



**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
BUGA – VALLE DEL CAUCA**
OFICIOS SECRETARIO SALA CIVIL FAMILIA - TUTELA



Guadalajara de Buga, 18 de octubre de 2019

Oficio SCF No. 006866

Señor

CARLOS EDUARDO GUZMAN ACOSTA, representado Judicialmente por el Dr.
VICTOR HUGO MORENO HURTADO
MINERVA GONZALEZ PEÑA
Derechoparatodos.sas@gmail.com

Señores

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES
notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co

Señores

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
notificacionesjudiciales@axacolpatria.co, arcolpatria@axacolpatria.co

Señores

COOMEVA E.P.S.
correoinstitucionaleps@coomeva.com.co

Señores

NUEVA EPS
Secretaria.general@nuevaeps.com.co

Señores

JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA
jrcivalle@emcali.net.co

JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ

Servicioalusuario@juntanacional.com radicacion@juntanacional.com

Doctora

INGRID CAROLINA ARIZA CRISTANCHO
Directora de Medicina Laboral de Colpensiones
notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co

Señores

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE TULUA – VALLE
J02cctulua@cendoj.ramajudicial.gov.co

Elaboró: Nancy López



**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
BUGA – VALLE DEL CAUCA**

OFICIOS SECRETARIO SALA CIVIL FAMILIA - TUTELA



Radicación No.: 76-834-31-03-002-2019-0161-01
Referencia : Acción de Tutela - Impugnación
Accionante: CARLOS EDUARDO GUZMAN ACOSTA
Accionado : COLPENSIONES Y OTRO

A efectos de notificarle la decisión proferida en el asunto de la referencia, se remite copia de la providencia.

Cortésmente,

GEIBER ALEXANDER ARANGO AGUDELO
Secretario

Elaboró: Nancy López

TRIBUNAL SUPERIOR DE BUGA



SALA CIVIL FAMILIA DE DECISIÓN

Magistrado Ponente:

ORLANDO QUINTERO GARCÍA

PROYECTO APROBADO SEGÚN ACTA No. 082

Guadalajara de Boga, dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019)

1. OBJETO DE ESTE PRONUNCIAMIENTO.

Decide la Sala la impugnación formulada contra la sentencia que el 11 de septiembre de 2019, profirió la JUEZA SEGUNDA CIVIL DEL CIRCUITO DE TULUÁ, al interior del amparo constitucional avivado por el ciudadano CARLOS EDUARDO GUZMÁN ACOSTA, actuando a través de apoderado judicial, frente a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, y la ARL AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A., la cual se hizo extensiva a la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA, la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN, la empresa AUTOGESTIÓN CTA, a la EPS COOMEVA, la NUEVA EPS S.A., a la DIRECTORA DE MEDICINA LABORAL DE COLPENSIONES, a la doctora INGRID CAROLINA ARIZA CRISTANCHO y a la señora MINERVA GONZÁLEZ PEÑA, en calidad de esposa del quejoso.

2. ANTECEDENTES RELEVANTES.

El promotor de la tutela acude a este mecanismo tuitivo buscando protección constitucional a sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, salud, debido proceso y dignidad humana, al parecer vulnerados por las entidades convocadas. En consecuencia, solicita que se ordene a quien corresponda, cancelar el valor de los honorarios que requiere la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ para darle

trámite a la apelación formulada frente al dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, e igualmente que se disponga el pago de viáticos para él y un acompañante, con el fin de acudir a la cita de valoración que eventualmente pueda requerirse en la ciudad de Bogotá.

Como hechos que sustentan la solicitud de amparo, relató el accionante los siguientes:

- Que el 9 de julio de 2010 sufrió un accidente de trabajo que lo mantiene incapacitado hasta la fecha.
- Que mediante Dictamen No.25060 del 22 de diciembre de 2018, la ARL AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. calificó su pérdida de capacidad laboral, determinando un porcentaje del 30.04% de PCL, de origen común y fecha de estructuración 22 de diciembre de 2018.
- Que al desatar la inconformidad presentada por el señor CARLOS EDUARDO GUZMÁN ACOSTA frente al anterior concepto, la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA estableció un 50.37% de PCL, enfermedad de origen común y fecha de estructuración 22 de diciembre de 2018.
- Que al no estar de acuerdo con el resultado, COLPENSIONES impugna dicho dictamen, para que sea resuelta por la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, trámite que aún no se ha efectuado.
- Que el señor GUZMÁN ACOSTA solicitó tanto a COLPENSIONES como a la ARL COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A., cancelar los honorarios requeridos por la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, y el pago de los viáticos para su traslado hasta la ciudad de Bogotá junto con un acompañante, pero ambas entidades negaron su pedimento; el Fondo de Pensiones, aduciendo que es la entidad de Riesgos Profesionales la encargada de su reconocimiento y pago, por ser la institución que inició el trámite de calificación en primera oportunidad; mientras que está última, sostiene que al ser la enfermedad diagnosticada como de origen común, lo

reclamado por el actor es del resorte de aquella.

Réplicas

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.: Enfatizó que al haberse calificado las contingencias como de origen común por parte de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, mediante dictamen del 20 de marzo de 2019, le corresponde al Fondo de Pensiones y a la EPS suministrar las prestaciones que demande el accionante, así como el pago de los honorarios a la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ para que se surta la apelación formulada por COLPENSIONES.

JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA: Enterada de la acción, indicó que mediante dictamen No.16760101-1573 del 20 de marzo de 2019, resolvió la inconformidad que elevó el actor frente al concepto emitido en primera oportunidad por AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.; que por estar en desacuerdo con el resultado, COLPENSIONES presentó recurso de apelación, pero como no ha cancelado los honorarios, el expediente sigue sin enviarse a la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, conforme a lo reglado en el artículo 2.2.5.1.41 del Decreto 1072 de 2015.

COOMEVA E.P.S.: Solicitó su desvinculación, teniendo en cuenta que no es la llamada a satisfacer lo pretendido por el accionante.

NUEVA E.P.S. S.A.: Pidió ser desvinculada de este trámite, pues la acción se dirigió contra COLPENSIONES y AXA COLPATRIA S.A., entidades que deben responder por los requerimientos del actor.

No hubo más pronunciamientos

3. DECISIÓN Y SU IMPUGNACIÓN.

Después de citar algunos pronunciamientos jurisprudenciales y normatividad que consideró aplicable al caso, la *a-quo* resolvió conceder el amparo suplicado, ordenando a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, cancelar los honorarios correspondientes a favor de la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, a fin de que se surta el recurso de apelación formulado de cara al dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA.

Adicionalmente, dispuso que, en caso de requerirlo, COLPENSIONES deberá autorizar los gastos que demande el desplazamiento del quejoso para acudir a cita de valoración ante la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ en la ciudad de Bogotá, a tenor de lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 1352 de 2013, en aras de evitar que el señor CARLOS EDUARDO GUZMÁN ACOSTA tenga que presentar una nueva acción de tutela por este motivo.

En sustento de tal determinación, la Jueza constitucional de primera instancia señaló que conforme a lo estatuido en el artículo 6º del Decreto 2463 de 2001 y el canon 17 de la Ley 1562 de 2012, el pago de los honorarios está a cargo de las Entidades Administradores de Fondos de Pensiones o de las Administradoras de Riesgos Laborales, y que al haberse calificado los diagnósticos que padece el señor CARLOS EDUARDO GUZMÁN ACOSTA como de origen común, esa obligación recae en este caso sobre COLPENSIONES.

Inconforme con la sentencia de primera instancia, COLPENSIONES la impugna aduciendo que la calificación de pérdida de la capacidad laboral del actor la realizó en primera oportunidad la ARL COLPATRIA, y que por

ello no le corresponde cancelar los honorarios reclamados por la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, ni es de su resorte reconocer el pago de viáticos y demás gastos que resulten para el traslado del usuario.

4. CONSIDERACIONES

Para resolver la impugnación formulada por COLPENSIONES, preliminarmente importa recordar que el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, establece cuales son las entidades responsables de calificar en primera oportunidad el origen de la enfermedad, fecha de estructuración y el porcentaje de disminución laboral sufrido por el afiliado. La normativa en comento señala:

[...] Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales.

[...]

La anterior disposición se acompasa con lo previsto en el artículo 2.2.5.1.26. del Decreto 1072 de 2015, el cual señala:

Condiciones que deben reunir las entidades que califican la pérdida de la capacidad laboral. Cada una de las entidades administradoras de riesgos laborales, de las Entidades Promotoras de Salud y de las Administradoras del Régimen Subsidiado, deberán disponer de un equipo interdisciplinario para realizar la calificación por pérdida de la capacidad laboral, el cual deberá contar con un médico con experiencia mínima específica en medicina laboral de un (1) año, un médico especialista en medicina física y rehabilitación con experiencia mínima específica de dos (2) años y un profesional diferente a las áreas de la medicina con formación en áreas afines a la seguridad y salud en el trabajo, con una experiencia relacionada de dos (2) años. Este equipo deberá efectuar el estudio y seguimiento de

los afiliados y posibles beneficiarios, recopilar pruebas, valoraciones, emitir conceptos de rehabilitación en cada caso y definir el origen y grado de pérdida de la capacidad laboral. Así mismo, deberá diligenciar el formulario autorizado por el Ministerio del Trabajo para notificar el dictamen correspondiente, en el cual se deberá señalar al notificado la oportunidad de acudir ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, término para presentar la reclamación, e informar que es la entidad administradora la que asume el costo de dicho trámite.

(...)

Significa lo anterior, que cualquiera de las entidades que integran el Sistema de Seguridad Social en Salud tiene competencia para dictaminar en primera oportunidad el origen de la enfermedad, la fecha de estructuración y el porcentaje o grado de pérdida de la capacidad laboral del usuario.

Ahora, con relación al pago de los honorarios ante las JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ para que surta trámite correspondiente ante ellas, tema sobre el cual recae la inconformidad de COLPENSIONES, ha de recordarse conforme al artículo 17 de la Ley 1562 de 2012, dicho emolumento estará a cargo de la Administradora del Fondo de Pensiones, si en primera oportunidad se calificaron los diagnósticos como de origen común, y será responsabilidad de la Administradora de Riesgos Laborales, si la en la calificación se determinó de origen laboral. Veamos lo que textualmente señala la normativa en comentario:

ARTÍCULO 17. HONORARIOS JUNTAS NACIONAL Y REGIONALES. Los honorarios que se deben cancelar a las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez, de manera anticipada, serán pagados por la Administradora del Fondo de Pensiones en caso de que la calificación de origen en primera oportunidad sea común; en caso de que la calificación de origen sea laboral en primera oportunidad el pago debe ser cubierto por la Administradora de Riesgos Laborales, conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de Trabajo.

En ese sentido, es fácil concluir que ninguna razón le asiste a COLPENSIONES para negarse a pagar los honorarios reclamados por la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ para que se surta el

trámite de la apelación formulada, en tanto que el origen de las contingencias que padece el accionante es común, razón por la cual el amparo se abría paso como acertadamente lo consideró la *a-quo*, ya que el actuar injustificado del fondo de pensiones es la causante de la vulneración de los derechos fundamentales del señor CARLOS EDUARDO GUZMÁN, quien necesita definir su situación de cara a un posible derecho pensional por invalidez.

Igual acontece respecto al reconocimiento y pago de aquellos emolumentos en que se deba incurrir para el traslado del afiliado, en caso de ser necesario para emitir el concepto médico. En efecto, el artículo 2.2.5.1.32. del Decreto 1072 de 2015, señala lo siguiente:

Artículo 2.2.5.1.32. Pago de gastos de traslado, valoraciones por especialistas y exámenes complementarios. Todos los gastos que se requieran para el traslado de los integrantes de la Junta de conformidad con el presente capítulo, del afiliado, pensionado por invalidez o beneficiario objeto de dictamen, así como de su acompañante dentro o fuera de la ciudad de conformidad con el concepto médico, estarán a cargo de la entidad Administradora de Riesgos Laborales, Administradoras del Sistema General de Pensiones, el empleador correspondiente, de esta manera:

1. Por la Administradora de Riesgos Laborales, la Administradora del Sistema General de Pensiones, de acuerdo si la calificación en primera oportunidad fue de origen común o laboral;

2. Por el paciente, en el evento que solicite la revisión de la pensión de invalidez cuando esta haya sido suspendida según lo previsto en el artículo 44 de la Ley 100 de 1993 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan;

3. El empleador cuando llegue a las Juntas de Calificación de Invalidez a través del Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Así las cosas, habrá de confirmarse la sentencia objeto de impugnación.

Con base en lo expuesto, el Tribunal Superior de Buga, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre de la República de

Colombia y por autoridad de la ley, **RESUELVE: CONFIRMAR** la sentencia impugnada, según lo expuesto en precedencia.

Comuníquese por el medio más expedito, lo aquí resuelto a los interesados y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Los Magistrados,



ORLANDO QUINTERO GARCÍA



BÁRBARA LILIANA TALERÓ ORTÍZ



MARÍA PATRICIA BALANTA MEDINA